BIDEN | INFORME DE PROGRESO DE 3 AÑOS



INTRODUCCION

Para muchos en el movimiento por la justicia migrante, la toma de posesión del presidente Joe Biden en 2021 marcó un momento de esperanza y posibilidades después de cuatro años de la administración de Trump que se definió por su crueldad hacia les migrantes. Aunque Biden comenzó su mandato presidencial revocando varias de las crueles políticas de inmigración de Trump (mientras se demoraba con otras) e implementando algunas reformas modestas a la aplicación de la ley en el interior del país, en el transcurso de tres años su administración se ha movido cada vez más a la derecha estas cuestiones.

Bajo la administración Biden, las detenciones del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE por sus siglas en inglés) han vuelto a los niveles previos a la pandemia y la vigilancia se ha disparado. La Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP por sus siglas en inglés) ha experimentado con la detención de migrantes al aire libre a lo largo de la frontera. Durante el mismo tiempo, su administración abrió o amplió centros de detención y se negó a cerrarlos incluso cuando fue recomendado

por el gobierno de Biden. En cada oportunidad, Biden ha dejado clara su intención de mantener la frontera inaccesible y enjuiciar, detener, vigilar y deportar a más personas.

En negociaciones recientes para un paquete de financiación suplementario, Biden aclaró que ve las vidas de les migrantes como moneda de cambio prescindible y que está mucho más cerca de la administración anterior en política de inmigración de lo que indicó durante su campaña electoral. En estas negociaciones, se ofreció voluntariamente a reducir su autoridad de libertad condicional y declaró que cerraría la frontera "ahora mismo". No sólo ha incumplido sus promesas, sino que el Presidente se ha movido hacia la derecha y se ha atrincherado en un cruel enfoque de disuasión y castigo de la migración que simplemente no funciona.

Tras el fracaso del Congreso en aprobar el paquete de financiación suplementaria negociado, los informes indican que Biden podría emitir <u>órdenes ejecutivas</u> o regulaciones que intentarían lograr algunos de los objeti-

vos políticos negociados para ese proyecto de ley, incluido dificultar que las personas solicitando de asilo pasen la primera etapa del proceso y rechazando arbitrariamente a muches solicitantes de asilo en la frontera antes incluso de que lleguen a esa primera etapa. En un viaje reciente a la frontera, Biden sorprendentemente invitó a Trump a unirse a él para presionar al Congreso para que aprobara el fallido proyecto de ley suplementario y lo hizo de nuevo durante su discurso del Estado de la Unión en Marzo.. Por ultimo, Biden promulgó un proyecto de ley de asignaciones para el año fiscal 2024, negociado a través de reuniones clandestinas con líderes republicanos, que aumentó la financiación para la detención y vigilancia por parte de ICE a niveles nunca antes vistos en la historia de la agencia, suficiente para detener a una población diaria promedio (ADP, por sus siglas en inglés) de casi 42.000 personas.

En lugar de avanzar hacia el cumplimiento de su promesa de un sistema de inmigración más humano, en general, el presidente no sólo ha retrocedido en todas nuestras exigencias políticas, sino que ha cedido cada vez más terreno a los sectores antiinmigrantes más extremos del gobierno y la sociedad, y en el proceso, ha desplazado el punto de partida de futuras negociaciones más hacia la derecha. Si el presidente continúa por este camino, consolidará su legado de cofirmante de una agenda de derecha en cuestiones de migración. Biden no ha cumplido sus promesas. Exigimos que el presidente cambie de rumbo inmediatamente y avance una visión proinmigrante que respete la dignidad de todas las personas.

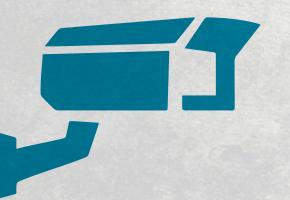




BIDEN RESPALDA UNA AGENDA DE DERECHA

Durante los últimos tres años, Detention Watch Network (DWN) ha exigido que la administración Biden se aparte del enfoque de disuasión aplicado por este país durante décadas, que se basa en detenciones inhumanas e innecesarias.

En lugar de luchar contra este camino inmoral, Biden continúa negociando con las vidas de inmigrantes y respaldando la cruel agenda antiinmigrante de la extrema derecha. Al comienzo del cuarto año de la presidencia de Biden, evaluamos su progreso cambio peligroso y le pedimos urgentemente que cambie de rumbo.



DWN CONTINÚA EXIGIENDO QUE BIDEN TOME LAS SIGUIENTES ACCIONES DURANTE SU CUARTO AÑO EN CARGO:



EXIGENCIA 1

Liberar a las personas de la detención migratoria y detener los traslados dentro del sistema ICE y desde cárceles y prisiones.



EXIGENCIA 2

Detener todos los esfuerzos de expansión de la detención, cerrar los centros de detención y terminar los contratos.



EXIGENCIA 3

Reducir las vías que llevan a la detención al poner fin a la colaboración entre la policía y ICE, deteniendo el enjuiciamiento de migrantes y restaurando el acceso al asilo en la frontera sin el uso de la detención.



EXIGENCIA 4

Poner fin al uso de programas de vigilancia invasivos y obligatorios de ICE.



EXIGENCIA 5

Mantener unidas a las familias poniendo fin a las políticas de inmigración basadas en la disuasión y terminando permanentemente la detención y vigilancia familiar mediante la formulación de políticas formales.



EXIGENCIA 6

Recortar los fondos para ICE y CBP en el presupuesto propuesto por el presidente para el año fiscal 2025 y el proyecto de ley de asignaciones finales y, en su lugar, invertir en las comunidades.



Liberar a las personas detenidas y detener los traslados dentro del sistema de ICE y desde cárceles y prisiones





Durante los últimos tres años, la administración de Biden no logró reducir el número de personas en detención migratoria mediante liberaciones y no ha logrado detener los traslados. En cambio, por tercer año consecutivo, el número de detenciones de ICE aumentó a un máximo de casi 40.000 en noviembre de 2023, donde han permanecido. Esto es casi el triple del número de personas detenidas en comparación con el punto más bajo durante la pandemia de Covid-19 en febrero de 2021, cuando el número de personas detenidas cayó a poco más de 13.000. La estancia promedio de las personas detenidas también ha aumentado durante el último año, al igual que el uso del régimen de aislamiento. Durante los primeros tres años de presidencia de Biden, al

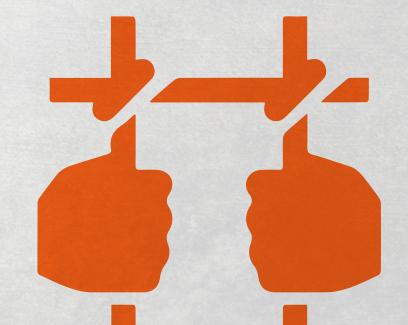
menos 16 personas murieron bajo custodia de ICE, <u>incluidas dos personas en diciem-</u> <u>bre de 2023</u>, Frankline Okpu y Carlos Juan Francisco, y dos personas en lo que cabe del 2024, Ousmane Ba y <u>Charles Leo Daniel</u>.

En instalaciones que la administración había marcado previamente para que su población se redujera o donde los propios inspectores del gobierno determinaron que nadie debía ser detenide ahí, la administración de Biden no solo no liberó a las personas, sino que, en cambio, aumentó el número de personas detenidas en esas instalaciones. Por ejemplo, en 2022, la administración anunció que reduciría la población y la capacidad de detención de ICE en el Centro Correccional Winn en Luisi-

ana, pero el número de personas detenidas allí ha aumentado constantemente y hoy la instalación está operando por encima del mínimo garantizado contractualmente mientras las condiciones siguen siendo terribles.

De manera similar, ICE ha seguido deteniendo a un número cada vez mayor de personas en el Centro de Detención del Condado de Torrance a pesar de un informe condenatorio de la Oficina del Inspector General (OIG por sus siglas en inglés) del Departamento de Seguridad Nacional que insta a que ICE deje de detener a personas allí. El hecho de que ICE no siguiera la recomendación de la OIG finalmente resultó en una trágica muerte por suicidio. Desde entonces, ICE

ha aumentado drásticamente el número de personas que detiene en Torrance (en ocasiones hasta 500 personas, cerca del mínimo garantizado contractualmente) mientras las condiciones continúan sin cambio alguno.



EXIGENCIA 2

Detener todos los esfuerzos de expansión, cerrar los centros de detención y terminar con los contratos, incluyendo no renovar contratos que expirarán en 2023





En los primeros dos años de la presidencia de Biden, ICE puso fin a varios contratos de detención y redujo el uso de otras instalaciones, incluidas las instalaciones de la lista las Primeras Diez de Comunidades Si, Jaulas No de DWN. Estas victorias comunitarias incluyen la terminación de los contratos de detención de ICE para la cárcel del condado de Irwin, la cárcel del condado de Bristol, la cárcel del condado de Etowah, el centro de detención del condado de Berks y la cárcel del condado de Yuba. Este año, cuando la campaña Comunidades Si, Jaulas No de DWN cumple cinco años, celebramos estas victorias reñidas mientras continuamos responsabilizando a la administración de Biden.

A pesar de estos triunfos, además de varios otros que resultaron de la defensa a nivel local o estatal, ICE mantuvo la capacidad

general de detención al expandir o abrir nuevos centros de detención, como el Centro de Detención del Valle de Moshannon en Pensilvania. Esta prisión privada anteriormente era una instalación del Buró de Prisiones hasta que ese contrato se vio obligado a terminar bajo la orden ejecutiva de Biden sobre prisiones privadas. A pesar de las promesas hechas durante su campaña y en sus primeros días como presidente, esta orden ejecutiva no incluía la detención de ICE. Si bien la orden ejecutiva debe verse como una victoria del movimiento por la liberación de las cárceles, la exclusión de la detención de ICE por parte de Biden abrió la puerta al carrusel carcelario, permitiendo que instalaciones como Moshannon se convirtieran en centros de detención de ICE.

En 2023, el tercer año de Biden a cargo, no logró poner fin a ningún contrato de detención de ICE, perdiendo la oportunidad de poner fin a 12 contratos que expirarían ese año. Once de estas instalaciones siguen siendo usadas. ICE se retiró de una instalación (la cárcel del condado de Okmulgee) debido a condiciones inhumanas, pero se negó a cancelar oficialmente el contrato. Además, la administración no puso fin a los contratos de todas las instalaciones excepto dos (Berks y Yuba) enumeradas en una evaluación interna que pedía el cierre de al menos nueve instalaciones.

Biden se ha negado repetidamente a cerrar instalaciones con antecedentes de abuso, incluidas Winn y Torrance, como se señaló anteriormente, así como el <u>Centro de Detención de Farmville</u> en Virginia, el <u>Centro de Detención de Adelanto</u> en California y el <u>Centro de Detención por Contrato de Elizabeth</u> en Nueva Jersey. Biden continuó donde

quedo la administración de Trump al apoyar exigencias iniciadas por empresas penitenciarias privadas para resistir la legislación estatal diseñada para limitar las detenciones de ICE en California y Nueva Jersey.





Reducir las vías que llevan a la detención poniendo fin a la colaboración entre la policía y ICE, deteniendo el enjuiciamiento de migrantes y restaurando el acceso al asilo en la frontera sin el uso de la detención





Gran parte del crecimiento de la detención es resultado de la postura cada vez más dura de Biden en materia de fronteras y asilo. En el primer año de la administración Biden, la vicepresidenta Kamala Harris le dijo a les migrantes "no vengan" y, desde entonces, Biden ha anunciado repetidamente su intención de intensificar la vigilancia fronteriza y las detenciones. Como resultado, el principal camino hacia la detención ha seguido siendo el arresto de las personas recién llegadas en la frontera.

En una medida muy esperada, la administración Biden finalmente puso fin al Título 42 en 2023, pero solo después de implementar varias políticas nuevas destinadas a reducir el acceso a la frontera, incluida la creación de algunas vías legales para personas de ciertos países, el aumento de los vuelos de deportación y el requisito del

uso de la defectuosa aplicación telefónica CBP One. Estas nuevas políticas hicieron casi imposible que la mayoría de las personas accedieran a protección en la frontera, implementaron sanciones para quienes no pueden acceder a las nuevas vías o tecnologías y aumentaron la militarización en la frontera y en todas las rutas migratorias en las Américas.

En general, la aplicación de la ley en el interior del país no ha alcanzado los niveles de administraciones anteriores (nuevamente, gracias a la intensa presión del movimiento y la implementación de políticas santuario). En enero de 2023, nuevamente luego de una campaña de promoción estratégica por parte de miembres de la comunidad, la administración Biden anunció nuevas protecciones para trabajadores que enfrentan abuso en el lugar de trabajo.

Sin embargo, Biden no ha tomado medidas significativas para separar la aplicación de la ley penal local de la aplicación de las leyes migratorias. A pesar de los <u>llamados</u> de larga data de defensores y expertes en derechos humanos para poner fin a estos programas, la mayoría de estas políticas que criminalizan la migración siguen vigentes, incluido el Programa de Detención Criminal que canaliza a personas de prisiones estatales y locales a la detención de ICE, y el 287g que delega a la policía para ayudar a ICE en la aplicación de la ley de inmigración en las cárceles locales.

Además, la administración Biden no ha intervenido adecuadamente en los ataques violentos del gobernador Abbott de Texas contra migrantes y, como resultado, otros estados están empezando a seguir su ejemplo. Si bien la administración Biden inter-

vino para evitar que Abbott mantuviera boyas y alambre de púas que amenazaban vidas a lo largo de la frontera, durante los últimos tres años que ha estado a cargo, ICE ha cooperado con la draconiana Operación Estrella Solitaria de Abbott, que canaliza a las personas hacia el proceso de detención y deportación de inmigrantes. Bajo esta política, Abbott ha declarado un estado de emergencia que le ha permitido arrestar a migrantes bajo las leyes estatales de invasión y luego ponerles bajo la custodia de ICE. Casi todas las personas arrestadas bajo esta política terminan bajo custodia de ICE, lo que contribuye al estatus de Texas como el estado con más personas detenidas por ICE.

EXIGENCIA 4

Poner fin al uso de programas invasivos y obligatorios de Alternativas a a la Detención (ATD por sus siglas en ingles) de ICE

En consistencia con las tendencias históricas, a medida que las cifras de detenciones han aumentado en los últimos tres años, el número de personas inscritas en el llamado programa de alternativas a la detención (ATD) de ICE (el Programa Intensivo de Asistencia a la Comparecencia o ISAP) se ha disparado. Si bien la cantidad de personas inscritas en el programa disminuyó en 2023, las cifras siguen siendo históricamente altas y ICE planea vigilar a más y más personas. Durante el último año, ICE ha puesto a más personas en rastreo por GPS, incluidos grilletes en los tobillos, que el año anterior.

Durante los últimos tres años, la administración Biden ha experimentado con diferentes formas de vigilancia, incluido el aumento del uso de la aplicación telefónica SmartLINK, el confinamiento domiciliario de las personas y la puesta a prueba de un reloj inteligente con rastreo por GPS. Uno de estos nuevos programas es el Programa de gestión de deportación acelerada de familias (FERM por sus siglas en inglés). A través de este programa, ICE requiere que todas las familias que llegan a la frontera sometan al menos a un adulto al rastreo por GPS a través de un grillete en el tobillo e incluye un componente de arresto domiciliario que requiere que las familias estén confinadas en sus hogares durante la noche.











Mantener unidas a las familias acabando con las políticas de inmigración basadas en la disuasión y poner fin permanentemente a la detención de familias mediante la formulación de políticas formales

En su primer año en el cargo, Biden puso fin al uso de los tres centros de detención familiares restantes de ICE (aunque dos de estos centros continúan deteniendo adultos). Sin embargo, la administración no adoptó una política formal que pusiera fin a la práctica de la detención familiar, dejando la puerta abierta para que esta práctica pueda regresar. Durante los primeros tres años de su presidencia, Biden retrocedió en este tema al considerar restablecer la detención familiar en 2023, a pesar de condenar su uso por la administración previa y los daños que genera esta práctica, documentados desde hace mucho tiempo. Además, CBP ha seguido deteniendo a familias durante todo el procesamiento, lo que resultó en la muerte el año pasado de

al menos une niñe, <u>Anadith Danay Reyes</u> <u>Álvarez</u>, de 8 años.

Si bien les defensores han logrado rechazar un posible retorno de la detención familiar, la administración ha recurrido a nuevos métodos para controlar los movimientos de las familias migrantes. Como se señaló anteriormente, en 2023, como parte de las políticas que Biden implementó para reemplazar el Título 42, la administración estableció el programa FERM que requiere que todas las familias que lleguen recientemente a la frontera estén inscritas en rastreo por GPS y confinamiento domiciliario.









EXIGENCIA 6

Recortar los fondos para ICE y CBP en el presupuesto propuesto por el presidente para el año fiscal 2024 y el proyecto de ley de asignaciones finales y, en su lugar, invertir en las comunidades



En sus primeras tres solicitudes presupuestarias, Biden ha incluido reducciones en los fondos para la detención de ICE. Sin embargo, las primeras dos leyes de presupuestos aprobadas por el Congreso han mantenido consistente el financiamiento para la detención de 34.000 personas al tiempo que también han aumentado los fondos para la vigilancia de ICE (ATD). Para el año fiscal (FY por sus siglas en inglés) 2024, su solicitud inicial proponía reducir la capacidad de detención a 25.000 personas, pero incluyó un fondo de contingencia que le habría permitido a ICE mantener en última instancia la capacidad para 34.000 personas. Biden retrocedio aun mas en la última versión del proyecto de ley del año fiscal 2024, negociando con el liderazgo republicano para aprobar niveles históricos de financiación para la aplicación de la ley, incluida la asignación más alta para operaciones de custodia en la historia de ICE, financiando un ADP de 41.500.

Biden dejó claras sus intenciones de aumentar el número de detenciones también fuera de las asignaciones regulares, incluso mediante solicitudes suplementarias. En agosto 2023, Biden presentó una solicitud inicial de financiación suplementaria que incluía casi mil millones de dólares en dinero sin restricciones para la aplicación de la ley, incluso para financiar los llamados "centros residenciales comunitarios" (detención familiar con otro nombre), mayor vigilancia y deportaciones rápidas.

Siendo que su solicitud de financiación de agosto no se cumplió, en octubre de 2023, el <u>Presidente volvió a solicitar más dinero</u> al Congreso, que incluía 4.500 millones de dólares para CBP y 2.500 millones de dólares para ICE y financiaría 1.000 agentes de la patrulla fronteriza adicionales, aumentaría drásticamente la capacidad de detención y militarizaría aún más las rutas migratorias. La solicitud también incluía 14 mil millones

de dólares para financiar el genocidio que el gobierno israelí está llevando a cabo en Gaza, así como financiación militar para Ucrania y Taiwán. Les republicanes exigieron inmediatamente que el proyecto de ley incluyera disposiciones perjudiciales sobre políticas de inmigración como las de la Resolución 2 de la Cámara de Representantes. A medida que continuaban las negociaciones, Biden dejó en claro su intención de ceder en varias cuestiones políticas para que se aprobara el proyecto de ley de financiación suplementaria, indicando al Congreso su intención de aumentar las detenciones y la aplicación de leyes migratorias. El acuerdo negociado final incluía varias disposiciones políticas restrictivas: una nueva política de expulsión fronteriza, estándares de asilo más estrictos que harían casi imposible que la mayoría de las personas obtuvieran protección en Estados Unidos, y más detenciones y deportaciones. También le habría proporcionado a Biden más de lo que pidió inicialmente, 118

mil millones de dólares, incluidos miles de millones de dólares en fondos adicionales para ICE y la mayor asignación de fondos para detención y vigilancia en la historia de ICE. Afortunadamente aún no ha sido aprobada por el Congreso, pero permanece una amenaza continua.

Más recientemente, para su cuarta propuesta de presupuesto para el año fiscal 2025 (FY25) publicada en marzo de 2024, Biden solicitó más dinero que el año pasado tanto para ICE como para CBP. La propuesta solicitaba una capacidad de detención de 34.000 y nuevamente incluye un fondo de contingencia que permitiría a ICE agregar más capacidad a lo largo del año. Además de esta solicitud de casi \$26 mil millones de dólares para ICE y CBP para el año fiscal 2025, el presidente volvió a pedir al Congreso que considerara la solicitud de financiamiento suplementario que hizo en octubre de 2023, que inyectaría a las dos agencias otros \$7.9 mil millones.

